

**JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS  
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA**

**SENTENCIA DE TUTELA No. T-007**

**RAD.: No. T-001-2024-00008-00**

Santiago de Cali, veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

**I. OBJETO DE ESTE PRONUNCIAMIENTO**

Procédase con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes, a proferir el fallo que corresponde dentro de la presente acción de tutela, instaurada por la señora **DIANA CAROLINA ORTIZ LUENGAS** contra la **SECRETARÍA DE TRANSITO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA**, a través de su secretario, o quien haga sus veces; y a la que se vinculó al **SISTEMA NACIONAL DE MULTAS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO (SIMIT)**, a través de su Representante Legal, o quien haga sus veces; por la presunta vulneración a su derecho de petición y debido proceso.

**II. ANTECEDENTES**

Demandó el amparo de los derechos que invoca, por cuanto, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, la entidad accionada no le ha dado respuesta de fondo a la petición que impetró el **26/12/2023**.

Como sustento de hecho manifiesta que, presentó el derecho de petición en mientes ante la entidad accionada, al cual le correspondió el **radicado No. 20231000268972**, solicitando la nulidad de una fotomulta de la que dice nunca fue notificada.

Agrega que el **07/12/2023**, recibió notificación vía mensaje de texto, donde le solicitaban ponerse al día con el pago de un comparendo del cual no tenía conocimiento y que después de consultar en la plataforma Simit, confirmó la existencia del **comparendo No. 7689200000038503220**, con fecha del **14/07/2023**, mismo que no fue notificado de manera oportuna, vulnerando sus derechos de defensa y debido proceso.

Finalmente solicita se le amporen los derechos constitucionales invocados y se le ordene a la **Secretaría de Transito de Yumbo**, declarar la nulidad al fotoccomparendo que nunca fue notificado en los termino y modos establecidos por la ley y normatividad y en consecuencia ordenar el desmonte del **Simit** de dicho comparendo.

### III. ACTUACIÓN PROCESAL

Radicada la petición de amparo constitucional, mediante **auto No. 0106 de 16/01/2024**, se procedió a su admisión, haciéndose la vinculación a que hubo lugar, ordenándose igualmente su notificación, otorgando a la accionada y vinculado el término de un día para que manifestaran lo que a bien tuvieran sobre los hechos y las pretensiones de la petición de amparo, recibiendo las respuestas que a continuación se sintetizan.

i) **Federación Colombiana de Municipios – Simit.** – La entidad vinculada ejerció oportunamente su derecho de defensa, mediante respuesta recibida el pasado **17/01/2024**, anexando 1 archivo digital en PDF de 6 páginas, ubicado en el documento 06 del expediente electrónico de la presente tutela. Manifiesta el Coordinador del Grupo Jurídico que, que la competencia para conocer de los procesos contravencionales recae exclusivamente en los organismos de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, motivo por el cual esa entidad, en calidad de administrador del sistema, no está legitimada para efectuar ningún tipo de inclusión, exclusión, modificación o corrección de registros, por cuanto solo se limita a publicar la base de datos suministrada por los organismos de tránsito a nivel nacional sobre infracciones y multas impuestas y cargadas por cada organismo. En los casos en que es necesario efectuar algún ajuste o corrección a la información que ya ha sido reportada al sistema, siendo los organismos de tránsito quienes efectúan el reporte correspondiente, por cuanto legalmente ejercen el proceso contravencional en desarrollo de sus competencias como autoridades de tránsito. Por lo que solicita se le exonere de toda responsabilidad, frente a la presunta violación de los derechos fundamentales aducidos por la accionante.

ii) **Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Yumbo – Valle.** – La entidad accionada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, mediante respuesta recibida el **18/01/2024**, anexando 1 archivo digital en PDF con 31 páginas, ubicado en el documento 07 del expediente electrónico de la presente tutela. Manifiesta el Jefe de Despacho que, respecto a la notificación del **comparendo No. 76892000000038503220**, se reporta evidencia para el **09/07/2023**, a las **03:13 pm**, y fecha de validación para el **14/07/2023**, realizando envío a distribución del mismo, mediante **guía No. 38503220** de la empresa **Expres Service**, a la dirección **Calle 57 Norte, # 3BN-19, Cali**, el cual fue devuelto con causal de Rehusado. Que mediante publicación en la página web de la **Alcaldía del Municipio de Yumbo**, y en lugares públicos de la **Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo**, con el fin de garantizar el debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, para el acceso a los beneficios y descuentos establecidos conforme al Código Nacional de Tránsito. Que, respecto al derecho de petición impetrado por la parte accionante, se le dio respuesta vía correo electrónico el **18/01/2023**, por lo que solicita se declare la improcedencia de la presente acción de tutela, y se deniegue debido a que no es el mecanismo legal idóneo, pues no existe perjuicio o riesgo inminente.

#### IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, el artículo 37 del Decreto 2591, modificado por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el Decreto 1983 de 2017, y el Decreto 333 de 2021; es competente este Estrado Judicial para conocer, tramitar y decidir la presente petición de amparo constitucional. Así mismo, ha de tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 86 en mientes, **la promoción de la acción de tutela puede hacerla cualquier persona directamente**, como es este el caso, **o por quien actúe en su nombre**, y que la entidad accionada es aquella respecto de quien se dice está conculcando los derechos fundamentales al accionante.

La Carta Política de 1991 albergó en su articulado entre otros mecanismos que desarrollan el Estado Social de Derecho, la acción de tutela, como la herramienta adecuada para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales “(...) cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (...)”<sup>1</sup>, haciendo de ésta, **un procedimiento preferente, sumario y subsidiario**.

En la acción constitucional que hoy ocupa la atención del Juzgado, el problema jurídico se concreta en determinar **i)** si en el presente asunto se configura el fenómeno denominado jurisprudencialmente como carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que, en su respuesta, la accionada manifiesta que ya fue emitida la contestación al derecho de petición impetrado por la tutelante, mediante oficio con **radicado No. 20241000013651 de 15/01/2024**, el cual le fue notificado a la accionante el **18/01/2024** en el correo electrónico [dianaortiz184@hotmail.com](mailto:dianaortiz184@hotmail.com), aportada para ello tanto en la petición, como en el escrito de tutela para recibir notificaciones personales, allegando prueba de ello; o **ii)** si a pesar de lo anterior, la entidad accionada le continúa vulnerando al tutelante el derecho invocado.

Para resolver el problema jurídico planteado, debemos tener en cuenta especialmente lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992, los artículos 23 y 29 de la C.N., lo dispuesto en la Ley 1755 del 2015; así como también algunos de los precedentes jurisprudenciales que con relación al caso se han emitido.

Es del caso tener en cuenta en el presente asunto los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional respecto de la carencia actual de objeto, en especial por hecho superado, por lo que se tiene que en **sentencia T-018 de 2020**, sostuvo lo siguiente:

##### **“3. La carencia actual de objeto**

**3.1.** El numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente “[C]uando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo

---

<sup>1</sup> Artículo 86 Constitución Nacional.

cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”, debido a que **el amparo constitucional pierde toda razón de ser, en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela.**

**3.2.** La Corte Constitucional ha sostenido que “[l]a naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, **de tal manera que cuando la amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto, ya que no existiría fundamento fáctico para ello.**”

**3.3.** No obstante, la jurisprudencia constitucional ha señalado que independientemente de la declaratoria de carencia actual, los jueces de tutela pueden pronunciarse sobre los hechos del caso estudiado, llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela o condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes.

**3.4.** El fenómeno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acción de tutela, según el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hipótesis: **(i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta daño consumado o (iii) se está ante una circunstancia sobreviniente.**

**3.5.** La jurisprudencia constitucional ha indicado que el **primer evento**, esto es, **hecho superado**, se presenta **cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela.** Es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez de tutela, desaparece la causa que originó la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, cuya protección se reclamaba.

**3.6.** En cuanto al **segundo evento**, esta Corporación ha reiterado que se está ante un **daño consumado** cuando existe un perjuicio irreversible, que no puede ser remediado de manera alguna por el juez de tutela.

**3.7.** En lo que respecta a la carencia actual de objeto cuando se presenta un **hecho sobreviniente**, Corte explicado que son los “eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la Litis”.

**3.8.** Sobre la función del juez constitucional cuando se está en presencia de una **carencia actual de objeto por hecho superado**, en **Sentencia SU-522 de 2019**, la Corte Constitucional sostuvo que en estos eventos la autoridad judicial de conocimiento deberá constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, siempre que se garantice los derechos fundamentales de las personas; **(ii) y que la entidad demandada haya actuado** (o cesado en su accionar) a *motu proprio*, es decir, voluntariamente.

**3.9.** Así mismo, el Alto Tribunal aclaró que el **para el juez de tutela no es perentorio hacer un pronunciamiento de fondo**. Sin embargo, la Corte Constitucional, en sede de revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario, entre otros, para: “**a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental**”.

**3.10.** En síntesis, si bien la carencia actual de objeto torna en principio inocua la intervención del juez de tutela, debido a que la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales desapareció, lo cierto es que el funcionario judicial puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, cuando evidencie que ocurrió una trasgresión de los derechos fundamentales alegados.” (Negrita en parte y subraya del Despacho).

Ahora bien, el derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna, regulado a través de la Ley 1755 del 2015, siendo de carácter constitucional y fundamental, cuyo propósito es obtener una pronta respuesta de la autoridad ante quien se presente la solicitud, configurándose en el principal derecho que tienen las personas para recibir la particularización de la voluntad de la administración pública, sin limitarse a la posibilidad de que los particulares expongan sus inquietudes ante la administración y de manera excepcional ante los particulares, recibiendo una simple información, sino, que además, las respuestas deben ser oportunas, claras y resolver de fondo la solicitud formulada. Así mismo, en atención a su carácter de derecho fundamental, puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de tutela, cuya finalidad es que el particular obtenga un pronunciamiento frente a su solicitud, bien sea favorable o desfavorable a sus intereses.

En reiterada jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado acerca del derecho de petición y su carácter fundamental, de tal suerte que la respuesta debe **brindar una efectiva, adecuada y oportuna solución al asunto solicitado**, lo que no implica que la decisión sea a favor de quien hace la solicitud, pero sí que se adopte una posición clara y precisa frente al asunto, debiendo reunir la respuesta tres exigencias básicas:

“(…) **1) Que sea adecuada**, es decir, que se ciña a los requisitos de correspondencia e integridad; **2) Que sea efectiva**, es decir, que conduzca al peticionario a la solución de su problema; **3) Que sea oportuna**, puesto que así se satisface el principio de efectividad de los derechos (...)”<sup>2</sup> (Subraya y negrita del Juzgado).

Al respecto la Corte Constitucional reitera jurisprudencia mediante sentencia T-315/18, en la que indicó lo siguiente:

**“NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION-Elementos.**

---

<sup>2</sup> Sentencia T-257 de 1994 MP. Carlos Gaviria D.

*El derecho de petición se integra por (i) la prerrogativa de formular o elevar la petición, por lo que las prácticas que impidan o restrinjan esta posibilidad resultan, en principio, afectaciones caracterizadas al derecho fundamental de petición; (ii) **el derecho a obtener una resolución o respuesta material, clara y congruente respecto de lo solicitado, independientemente del sentido de lo que se decida, lo que implica que vulnera este derecho fundamental las respuestas meramente formales, evasivas y, en general, que no resulten plenamente congruentes respecto de lo requerido;** (iii) el derecho a que la decisión de fondo respecto de la petición sea proferida y notificada dentro del término legalmente previsto dependiendo del tipo de petición, razón por la que la respuesta tardía contraría este derecho.” (Subraya y negrita del Despacho).*

Por otra parte, también se ha aclarado que el derecho de petición no solo comprende la etapa de recepción y trámite de la solicitud, sino que **también se ocupa de la respuesta, la cual debe ponerse en conocimiento del peticionario.**<sup>3</sup> Es así como la Corte Constitucional ha fijado las reglas que deben tener en cuenta todos los funcionarios judiciales al aplicar esta garantía fundamental, las cuales tienen por núcleo esencial la resolución pronta y oportuna de la cuestión peticionada, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido, aclarando que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Ahora bien, en **sentencia T-595/19** la Corte Constitucional con relación al derecho fundamental al debido proceso, indicó lo siguiente:

*“El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, regulado en el Artículo 29 Superior, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, en procura de que los habitantes del territorio nacional puedan acceder a mecanismos justos, que permitan cumplir con los fines esenciales del Estado, entre ellos, la convivencia pacífica, la cual cobra gran relevancia en materia de tránsito”*<sup>4</sup>.

*Este derecho fundamental, para quienes tengan a su cargo el desarrollo de un proceso judicial o administrativo, implica la obligación de mantenerse al tanto de las modificaciones al marco jurídico que regula sus funciones, pues de lo contrario, su conducta puede acarrear la ejecución de actividades que no les han sido asignadas o su ejecución conforme con un proceso no determinado legalmente.*

*Frente a este particular, resulta adecuado traer a colación el Artículo 6º Superior, en cuanto dispone que todo servidor público responde por infringir la Constitución y la ley y por la “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, en concordancia con el Artículo 121 del mismo texto, en el que se determina que aquellos pueden ejecutar únicamente las funciones que se determinen en la Constitución y en la ley.*

---

<sup>3</sup> Sentencia T553 de 1994. MP.: José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>4</sup> Sentencia C-214 de 1994. “En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional”.

*En tal virtud, el principio de legalidad es una restricción al ejercicio del poder público, en atención a la cual “las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos.”<sup>5</sup>*

*Por otro lado, desde la perspectiva de los ciudadanos inmersos en una actuación administrativa o judicial, el debido proceso constituye una garantía para el acceso a la administración de justicia, de tal forma que puedan conocer las decisiones que los afecten e intervenir, en términos de igualdad y transparencia, para procurar la protección de sus derechos e intereses legítimos. En este sentido, el debido proceso se concibe como un escudo protector frente a una posible actuación abusiva de las autoridades, cuando estas se desvíen, de manera injusta, de la regulación jurídica vigente (...)”<sup>6</sup>.*

Del mismo modo, en dicha providencia, la Corte Constitucional hizo énfasis en la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se trate de actos administrativos, pues para eso se encuentran contemplados los mecanismos ordinarios que deben ser ventilados ante el juez natural.

**CASO CONCRETO.** – Establecer si con la respuesta emitida por la entidad accionada estando en trámite la presente acción de tutela, se configura en este asunto un hecho superado o, si a pesar de ello, se le continúan conculcando a la tutelante los derechos invocados.

Se encuentra probado en este asunto que la accionante, señora **Diana Carolina Ortiz Luengas**, presentó el **26/12/2023** el derecho de petición respecto del cual solicita el amparo constitucional, al cual le correspondió el **radicado No. 20231000268972**, solicitando la nulidad por no notificación del comparendo – fotomulta – que a continuación se relaciona:

Comparendo No.	Fecha
76892000000038503220	14/07/2023

Ahora bien, se tiene que la **Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo**, confirmó el recibido de la petición, informando igualmente que, frente a la solicitud de la tutelante, emitido respuesta<sup>7</sup> de fondo, mediante **oficio con radicado No. 20241000013651** de **15/01/2024**, misma que le fuera notificada el **18/01/2024**, aportando como prueba de ello copia de la constancia de envío, obrante en la página 3 del documento 7 del presente expediente de tutela, indicándole las razones por las cuales no declara la nulidad del fotoccomparendo.

Así las cosas, se advierte que en este trámite constitucional frente al derecho de petición, se configura la denominada carencia actual de objeto por hecho superado dado que, se evidencia que, la petición impetrada por la tutelante, fue contestada el **15/01/2024**,

---

<sup>5</sup> Sentencia C-980 de 2010.

<sup>6</sup> *Ibíd.*

<sup>7</sup> Páginas 26 y 31 del documento 07 del expediente electrónico.

notificada a la tutelante el **18/01/2024**, por la accionada, **Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo – Valle**, estando en trámite la presente acción constitucional, en la dirección de correo electrónico [vipafe40@gmail.com](mailto:vipafe40@gmail.com), aportada tanto en el escrito petitorio como en el de tutela para recibir notificaciones personales; respuesta que considera este Despacho **es adecuada**, por cuanto se ciñe a los requisitos de correspondencia e integralidad de la solicitud, y que **es efectiva**, toda vez que decide de fondo lo pedido, incluso, desfavorablemente, indicándole las razones por las cuales no es posible aplicar la nulidad al **fotocomparendo No. 7689200000038503220**, aportándole además, copia de la documentación pertinente.

Corolario a lo anterior, encuentra este Estrado Judicial que con la respuesta emitida por la entidad accionada, y que, se itera, le fuera notificada a la accionante estando en trámite la presente acción constitucional, ha cesado la vulneración del derecho fundamental alegado, configurándose así, lo que jurisprudencialmente se denomina carencia actual de objeto por hecho superado, que no es otra cosa que, cuando durante el trámite de la acción de tutela, su impugnación o revisión, sobreviene la cesación de la vulneración o amenaza del derecho que fue objeto de queja constitucional, y tal circunstancia se prueba, como en este caso, con las constancias de remisión al correo electrónico aportado por el accionante para recibir notificaciones personales tanto en la solicitud, como en esta acción constitucional.

En cuanto al derecho al debido proceso, no encuentra este Despacho que exista vulneración alguna, dado que, la entidad accionada demuestra que procedió a notificar el comparendo impuesto en la dirección que figura en el Simit, esto es la **Calle 57 Nte No. 3 BN – 19 de la ciudad de Santiago de Cali**, tal como consta en las páginas 5 y 6 del documento 07 del presente expediente electrónico, siendo devuelta dicha notificación por la causal “Rehusado”, por lo que se procedió con la notificación por aviso; por la cual frente a este derecho el Juzgado habrá de negar la presente petición de amparo constitucional.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY;**

**RESUELVE:**

**PRIMERO. – NIÉGASE** la presente petición de amparo constitucional impetrada por la señora **DIANA CAROLINA ORTIZ LUENGAS** contra la **SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE YUMBO**, respecto del **derecho al debido proceso**, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO. – DECLÁRASE** la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la presente acción de tutela impetrada por la señora **DIANA CAROLINA ORTIZ LUENGAS**



contra la **SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE YUMBO**, en lo atinente al **derecho de petición**, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

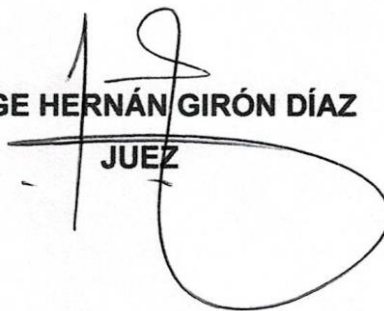
**TERCERO.** – **REMÍTASE** el presente expediente a la **HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL** para su eventual revisión, dentro del término consagrado en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en caso de no ser impugnado este fallo.

**CUARTO.** – **ORDÉNASE** que de ser excluida de revisión la presente acción de tutela por la **HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL**, se proceda al **ARCHIVO** del expediente por parte de la **OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI**.

**QUINTO.** – **NOTIFÍQUESE** esta decisión a las partes en la forma y términos previstos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991; no obstante, ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados de las resultas de este trámite, **SÚRTASE** dicha notificación por **AVISO** el que deberá fijarse en la Oficina de Apoyo – Secretaría y a través de publicación en la página web de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de esta ciudad.

**NOTIFÍQUESE.** –

**JORGE HERNÁN GIRÓN DÍAZ**  
**JUEZ**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name and title. The signature is fluid and somewhat abstract, with a large loop at the end.